

**S-2023**

**Procedimiento:**

Recurso de anulación laudo Arbitral

**Demandante:**

Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A.

**Demandada:**

Vértice Ingeniería S.A.S.

**Radicado:**

05001 22 03 000 2022 00514 01

**Asunto:**

Como las causales de anulación estiladas por la parte demandante no están probadas, es por lo que se niega la anulación del presente Laudo Arbitral.

**TRIBUNAL SUPERIOR  
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN  
-SALA DE DECISIÓN CIVIL-**

Medellín, Diecisiete (17) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Se ocupa la Sala de decidir la anulación interpuesta por la parte convocante frente al Laudo proferido por el Tribunal de arbitramento, el día 14 de junio de 2022, dentro del asunto planteado por la sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A., frente a la Sociedad Vértice Ingeniería S.A.S.

**I. ANTECEDENTES**

**1. Pretensiones.** Grosso modo y para lo que nos concierne, la Sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. en adelante A.I.A., solicitó ante el Tribunal de Arbitramento que sea declarada responsable civilmente la sociedad Vértice Ingeniería S.A. por todos los daños y perjuicios causados a la sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados, con ocasión de la acción popular en cuya sentencia ya fue condenada a pagar una suma de dinero por daños a los intereses colectivos, como también pidió contra la demandada declaración de responsabilidad y de condena contractual por los perjuicios que se llegaren a causar su contra y que surjan respecto de las futuras condenas que se puedan originar en una acción de grupo que viene cursando en su contra, ya éstas por perjuicios causados a terceros y con ocasión de la ejecución de la oferta mercantil de administración delegada y por la oferta mercantil de precios unitarios fijos suscrita entre las partes. Como consecuencia de dicha pretensión, solicitó que la sociedad sufrague las condenas que se han originado con ocasión de las acciones constitucionales, así como las costas y agencias en derecho que se originen de la defensa de los intereses en los procesos jurídicos.

**2. Hechos.** Los hechos en que se basan las pretensiones son resumidos así por éste Tribunal:

Entre las sociedades en cita, se celebraron los contratos (i) oferta mercantil o propuesta de negocio el 1 de febrero de 2004 “para prestar asesoría en la construcción bajo la modalidad de administración delegada del proyecto de Casas denominado “Canto de Luna”, (ii) la oferta mercantil o propuesta de negocio para ejecutar, bajo la modalidad de precio unitario fijo “las obras civiles de excavación, cimentación y llenos en el proyecto inmobiliario”. Negocios jurídicos que fueron aceptados en su integridad por la Sociedad Vértice mediante las respectivas órdenes de compra de servicios.

Sucede que, los propietarios de los predios vecinos del proyecto inmobiliario, presentaron una acción popular, en la que -previo desarrollo de las etapas pertinentes-, mediante sentencia del 19 de julio de 2017 -proferida por la Sala Segunda de Oralidad del Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia-, se declaró civilmente responsable por violación a los derechos colectivos a - *Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A (A.I.A) y a Vértice Ingeniería S.A-*, y al Municipio de Envigado, ordenando, entre otros aspectos, asumir la totalidad de los gastos en que incurrió el municipio con la contratación de Tecnisuelos y por las obras que se acometieron para dar cumplimiento a la medida cautelar surtida al interior de la acción constitucional, esto es, la suma \$1.679.419.323, condena que ha sido objeto de cobro coactivo por parte de la municipalidad, en donde se dispuso que la convocante debería asumir el 35% en virtud de la sentencia.

En efecto, advierte la convocante que si bien la condena no ha sido cancelada por ella, lo cierto es que se le ha generado una serie de gastos emergentes, como lo ha sido el asumir los honorarios de los abogados que adelantan la defensa jurídica de la compañía, aunado a las acciones que se adelantan en contra de la sociedad, como la acción de grupo que actualmente cursa en el Juzgado Once Civil del Circuito de Oralidad de Medellín, de donde podrían surgir posibles condenas en su contra, lo que representaría perjuicios para ella, a lo que suma las futuras posibles acciones que promuevan terceros en contra de aquélla.

Expone, que la Sociedad Vértice era quien debía encargarse de todas las decisiones para la correcta elaboración de la obra y de tramitar las

autorizaciones gubernamentales, como el estudio de suelos, que VÉRTICE siempre estuvo enterada sobre los riesgos que podía originar un talud de tierra en la construcción y sus posibles afectaciones en la ejecución de la obra, por lo que, en razón de ello, estimó que la sociedad convocada es quien debe asumir todo tipo de responsabilidad que por cualquier daño causado a terceros se origine, porque la convocante siempre cumplió con su obligación de ejecutar las obras de acuerdo a los parámetros técnicos, científicos, administrativos jurídicos y financieros que en efecto le informaron.

**3. Contestación.** La convocada se opuso a las pretensiones, afirmando, en síntesis, **(i)** La cláusula compromisoria pactada no da lugar para ventilar diferencias que surjan con relación a una pretensión de responsabilidad, porque no deviene de la celebración, ejecución, interpretación, terminación y liquidación de las ofertas mercantiles **(ii)** Prescripción Extintiva o caducidad de la acción **(iii)** Inexistencia de solidaridad entre las sociedades para el pago de condenas derivadas de la ejecución de la obra “Canto de Luna” o daños causados a terceros **(iv)** La responsabilidad civil en su calidad de constructor es responsabilidad directa por los perjuicios causados a terceros con la ejecución de la obra Canto de Luna **(v)** Cosa Juzgada **(vi)** Falta de causa para pedir **(vii)** Inexistencia del perjuicio reclamado **(viii)** Cobro de lo no debido.

## II. EL LAUDO ACUSADO.

Mediante Laudo del 14 de junio de 2022 el Tribunal Arbitral, en lo que importa para el Caso Concreto, luego de estudiar los presupuestos procesales, especialmente la competencia del Tribunal para adoptar una decisión de fondo, se planteó como problema jurídico objeto de discusión el siguiente: *¿es la sociedad convocada responsable contractualmente frente a la demandante por los perjuicios reclamados, presuntamente originados en decisiones ya adoptadas o que se adopten en el futuro en procesos judiciales iniciados por terceros supuestamente afectados por la ejecución de la obra Canto de Luna?* Hipótesis en forma de pregunta, para cuya respuesta el tribunal de Arbitramento empezó por enfocar la causa petendi en el pago de las condenas impuestas o futuras y el fundamento jurídico en la responsabilidad contractual, análisis que abordó bajo tres ítems, a saber: (a) ¿Existe en verdad el derecho auto (sic) atribuido por la sociedad convocante, al

pago de un perjuicio, según ella representado por el pago de unas condenas judiciales relacionadas con el contrato que tuvo celebrado con la sociedad convocada? (b) ¿De existir tal derecho, la base para su reconocimiento es efectivamente una responsabilidad contractual? (c) En forma similar ¿tendría la sociedad convocada responsabilidad frente a la actora y cuál será el hecho de su comportamiento –acción u omisión-, de ejecución o inejecución o ejecución tardía- que daría pie a la misma? Laudo Arbitral que, luego de analizar los planteamientos con los supuestos fácticos probados en el proceso, concluyó que no podían estimarse las pretensiones y, como consecuencia, se abstuvo de estudiar las excepciones de mérito, negó la sanción del juramento estimatorio y, en su defecto, dispuso la respectiva condena en costas.

### III. LA PETICIÓN DE ANULACIÓN.

Inconforme con el Laudo, la convocante pide su Anulación con base en la Causal 9 del Artículo 41 del Estatuto Arbitral, Ley 1563 de 2012, cuestionando, en síntesis, que el Tribunal no resolvió sobre la declaratoria de responsabilidad que se solicitó, el cual emana del vínculo contractual entre A.I.A y VÉRTICE., así como, la pretensión tercera de la demanda, consistente en el pago de 45.000.000, suma que obedece a los daños ciertos, personales y directos. Ello por cuanto, los argumentos de ausencia de pago y la petición antes de tiempo - para negar las pretensiones-, no son aplicables a la pretensión tercera, pues, se trata de sumas ya canceladas y que se derivan de las acciones adelantadas en las acciones populares.

### IV CONSIDERACIONES.

1. En consonancia con el Estatuto Arbitral Colombiano, esto es la Ley 1563 de 2012, amén del Laudo proferido por el Tribunal de Arbitramento de Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. en contra de Vértice Ingeniería S.A.S. el día 14 de junio de 2022, fallo que fuera impugnado por el Apoderado del convocante, cumpliendo *ab initio* por parte del aquí recurrente con haber interpuesto dentro de los treinta (30) días siguientes a la Decisión por medio de la cual dicho Tribunal denegó las pretensiones, aunado al traslado del recurso,

se entiende, en consecuencia, cumplidos los requisitos formalmente exigidos a fin de que resulte procedente el análisis formal del citado Laudo Arbitral.

2. Al abordar ahora el examen de los pormenores planteados a la sazón de la Causal invocada por el aquí recurrente, es decir, la contenida en el Numeral 9 del artículo 41 del precitado Estatuto, ha de verse cómo -para el Caso Concreto-, la inconformidad se traduce en no haber decidido el laudo sobre cuestiones sujetas al arbitramento, propiamente, se queja que no se resolvió sobre la responsabilidad contractual planteada y el reconocimiento de perjuicios indemnizatorios, por lo que esta Sala considera *prima facie*, con prescindencia de los argumentos aludidos por el recurrente, que muy contrariamente a lo expuesto por aquél, el Tribunal de Arbitramento acusado sí se pronunció sobre las pretensiones propuestas, tal y como se avizora en el planteamiento y respuesta del problema jurídico, toda vez que el equivalente jurisdiccional planteó y resolvió de fondo el siguiente problema: *-¿es la sociedad convocada responsable contractualmente frente a la demandante por los perjuicios reclamados, presuntamente originados en decisiones ya adoptadas o que se adopten en el futuro en procesos judiciales iniciados por terceros supuestamente afectados por la ejecución de la obra Canto de Luna?* Para cuya respuesta emprendió primero un análisis de cara a la configuración de los presupuestos de la responsabilidad contractual por actividades en la construcción y de la cual halló que no se correspondía con las verdaderas pretensiones de la demanda, por lo que pasó analizar que la responsabilidad contractual pretendida por la sociedad demandante estaba basada en los perjuicios recibidos al ser condenada en una acción popular, ya que de los hechos y pretensiones de la demanda no se sigue otra cosa que una condena por responsabilidad contractual, pero basada en las condenas impuestas a la convocante en una acción popular, misma que tuvo lugar en la jurisdicción contencioso administrativa, sin que la condena impuesta haya sido solidaria, como tampoco existió subrogación en el pago de dichas condenas y mucho menos se dan los presupuestos para la acción revérsica, por lo que aprovechó el tribunal de arbitramento para preguntarse si realmente lo pretendido pudo haber tenido origen en una responsabilidad civil contractual y por eso expuso que: *“la causa jurídica de la pretensión invocada en el presente proceso no es otra que una responsabilidad contractual, cuando expone que debe ser examinada*

por los pagos que le impusieron o se le impondrán por condenas en procesos, a raíz de la ejecución de la oferta mercantil de administración delegada y la oferta mercantil de precios unitarios fijos". Y más adelante remató diciendo que: "Materialmente, la causa petendi está configurada por el pago de condenas impuestas o futuras. Y jurídicamente, en lo que a los sujetos de la pretensión concierne, por el fundamento jurídico, la responsabilidad contractual".

Hasta aquí puede notarse cómo el Tribunal de Arbitramento identificó plenamente el problema jurídico, en cuanto que, si bien, las condenas impuestas en la acción popular tanto a la demandante como a la demandada lo habían sido bajo el alero de la responsabilidad extracontractual por daño al medio ambiente, sin embargo, pasó a escudriñar si se había producido una condena solidaria que tuviera alguna injerencia en el desarrollo y ejecución del contrato de administración delegada –como así llamaron las partes del proceso al contrato ejecutado para la construcción de las casas Canto de Luna-, pero lo que halló el Tribunal de arbitramento fue que el juez contencioso separó muy bien el grado de la culpa y de la responsabilidad extracontractual por el daño al medio ambiente, que atribuyó a cada empresa demandada, condenándolas a cada una por sumas distintas, pero por ahí mismo advirtió cómo la demanda se enfiló por una especie de responsabilidad civil contractual causada por los perjuicios recibidos en la acción popular con origen en la ejecución de la obra contratada a manera de contrato de administración delegada, lo que llevó al tribunal a concluir que sí tenía competencia para desatar la Litis y por eso pasó a definir de fondo el asunto, máxime cuando al verificar la cláusula compromisoria echó de ver desde su redacción, que su competencia abarcaba todo asunto contractual entre las partes, que surgiera del desarrollo, interpretación, terminación y liquidación, pues según la cláusula compromisoria era para la "SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. CLÁUSULA COMPROMISORIA. Las diferencias entre A.I.A S.A. y VÉRTICE INGENIERÍA S.A. en el desarrollo, interpretación, terminación o liquidación del negocio que resulte de la oferta mercantil y la orden de compra expedida por VÉRTICE INGENIERÍA S.A., serán sometidas a la decisión de un Tribunal de arbitramento...", que sí era competente, pues estaba habilitado para resolver las diferencias que surgieran entre las partes durante el desarrollo y la ejecución y liquidación del contrato, razón por la cual aunque el contrato ya había terminado, no obstante se produjeron daños a terceros, mismos que la sociedad demandante interpreta que



deben ser asumidos por la demandada, porque así se deduce de las obligaciones asumidas en la ejecución del contrato, razón que llevó al tribunal de arbitramento a definir que entonces se trataba de una responsabilidad civil contractual y por eso procedió a definir el fondo del asunto.

De lo anterior se sigue, que una vez el tribunal de arbitramento concluyó de manera inconcusa que se trataba de una acción de responsabilidad civil contractual y que la competencia para resolver la Litis era suya, pasó a plantearse tres interrogantes, cuyas respuestas serían suficientes para demostrar que la demanda no tenía cabida. Las tres premisas en forma de pregunta fueron las siguientes: **(i)** ¿Existe en verdad el derecho auto (sic) atribuido por la sociedad convocante, al pago de un perjuicio, según ella representado por el pago de unas condenas judiciales relacionadas con el contrato que tuvo celebrado con la sociedad convocada? **(ii)** ¿De existir tal derecho, la base de su reconocimiento es efectivamente una responsabilidad contractual? **(iii)** En forma similar, ¿tendría la sociedad convocada responsabilidad frente a la actora y cuál será el hecho de su comportamiento - acción u omisión- de ejecución o inejecución o ejecución tardía- que daría pie a la misma? Seguidamente y, luego de analizar los supuestos fácticos probados en el proceso, especialmente la sentencia condenatoria derivada de la acción popular, consideró que a partir de los hechos de la demanda, la hipótesis plausible para admitir el ejercicio de la pretensión revérsica, no podía ser otro que el ejercicio de la acción subrogatoria, sin embargo, por ahí mismo halló que al no existir una condena solidaria en la sentencia que resolvió la Acción Popular y como tampoco la sociedad convocante -Arquitectos e Ingenieros Asociados A.S-, ha hecho el pago de aquellas condenas, es por lo que determinó que no resultaba plausible conceder las pretensiones, porque el conflicto contractual que se presentó en la demanda no se origina directamente en el cumplimiento o no de las obligaciones contractuales, sino en un supuesto perjuicio originado en la sentencia de la acción popular que terminó por condenar a la convocante al pago de unas sumas de dinero por daños a terceros.

Ya de manera puntual el Tribunal de Arbitramento dedujo lo siguiente:

*En el presente proceso, como se ha dejado referido, la sociedad convocante busca que se declare que VÉRTICE INGENIERIA S.A. es responsable por todos los daños y perjuicios causados o que se causen a aquella “con ocasión de los procesos de la acción popular o de grupo o las que se inicien en el futuro y en los cuales fue condenada o resulte condenada” y al efecto se funda en una responsabilidad de tipo contractual, sosteniendo que el origen de dichas condenas, fuente próxima de los daños, obedeció o residirá en “la ejecución de la Oferta mercantil de administración delegada, del 1 de febrero de 2004, aceptada mediante orden de compra de servicios No 001 del 6 de febrero de 2004 y/o la Oferta mercantil de precios unitarios fijos, del 1 de febrero de 2004, aceptada mediante orden de compra de servicios No 002 del 6 de febrero de 2004”.*

*Concreta la parte accionante su pedido, en forma consecucional, en un primer caso, en “Todos los dineros -incluidos intereses moratorios y gastos ya fijados por costas- a los cuales se vea en la obligación de desembolsar o invertir, con ocasión de la condena proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo, mediante sentencia del 19 de julio de 2017, dentro del proceso de la acción popular, equivalente a MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES SETESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$ 1.371.791.251) o la suma mayor que llegue a acreditarse dentro del proceso”.*

*Otro supuesto lo vincula a condenas aún no impuestas, por una acción de grupo que cursa en el Juzgado Once (11) Civil del Circuito de Medellín, bajo el radicado 11-2006- 00237 y a procesos futuros que se podrían iniciar “en relación con los mismos hechos objeto de esta demanda, los cuales deben quedar cubiertos en esta pretensión”.*

Para resolver las pretensiones, el Tribunal de Arbitramento fue tan exhaustivo y escrupuloso, que si bien tuvo en cuenta la condena que ya se había proferido contra las partes dentro de la acción popular, echó de ver cómo allí se analizó una especie de responsabilidad civil extracontractual por daño a los intereses colectivos, sin embargo y por ahí mismo, echó de ver que el llamado de la sociedad demandante en el proceso arbitral se fundamenta con apoyo en una causa de responsabilidad civil contractual, pues entendió la convocante que todo daño y perjuicio causado a terceros con ocasión de la obra ejecutada –así fuese por daños a los bienes colectivos o a los terceros-, debía asumirlo la sociedad demandada “Vértice e Ingeniería SAS”, toda vez que fue ésta la ejecutora material de la obra y la que al hacer los taludes produjo los daños en el medio ambiente y los que se causen a terceros en la acción de grupo que está cursando en su contra, lo que para el Tribunal de arbitramento representaba una discusión de origen contractual, que fue lo que propuso la demandada y por eso no aceptó las excepciones de falta de competencia ni de cosa juzgada.



Vale la pena ahora citar in extenso apartes de la sentencia que resolvió de fondo el laudo arbitral, sobre todo en los temas que se estiman más contundentes, de cara a resolver el recurso de anulación, por lo que bueno es aterrizar en lo que dejó dicho el laudo sobre la sentencia que se profirió en la acción popular, en la que fueron condenadas las sociedades que hacen parte del laudo. Esto dice el laudo:

***“5. Aspectos relacionados con la sentencia condenatoria derivada de la acción popular***

*En la pretensión primera de la demanda y las demás consecuenciales se persigue una declaración de responsabilidad de VÉRTICE INGENIERIA S.A.S por los perjuicios causados a ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. con ocasión, entre otros, del proceso de acción popular cuya sentencia definitiva fue proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia el 19 de julio de 2017 (Rad. 05001- 23-31-000-2005-07260-03) con ponencia de la Magistrada Adriana Bernal Vélez.*

*En la mencionada sentencia, ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. y VÉRTICE INGENIERIA S.A.S. fueron declarados responsables por la violación de diferentes derechos colectivos con ocasión de la construcción de la urbanización Canto de Luna. En la sentencia se ordenó lo siguiente:*

*“10.1 Ordenar a Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. y a Vértice Ingeniería S.A. asumir en la siguiente proporción la totalidad de los gastos en los que incurrió el municipio de Envigado con la contratación de Tecnisuelos y por las obras que se acometieron para dar cumplimiento a la medida cautelar que ordenó el Despacho en el auto interlocutorio número 290 del 14 de diciembre de 2010:*

*Vértice Ingeniería: 50%*

*AIA: 35%*

*Este criterio responde al hecho del grado de responsabilidad en la afectación de los intereses colectivos. El restante 15% deberá asumirlo el municipio de Envigado por el daño a los intereses colectivos por la falta de control sobre la (sic) obras de Canto de Luna en la calidad de autoridad ambiental.”*

*El fundamento de la declaratoria de dicha responsabilidad se expone en la sentencia que resolvió definitivamente la acción popular de la siguiente forma:*

*“Por lo expuesto, para la Sala la vulneración de los derechos colectivos es imputable a las firmas Vértice Ingeniería S.A. y Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A. puesto que la primera fue la que diseñó el proyecto Canto de Luna, realizó los estudios y tramitó las licencias. Mientras que la segunda fue la que realizó la construcción y el ejercicio de las funciones de dirección y administración de la obra que le competían, debió advertir los riesgos y problemas que se presentaron por la forma en la que se intervino el talud.”*

*En la demanda arbitral se afirmó que, pese a que la parte actora en la acción popular formuló pretensiones solidarias, en la sentencia de segunda instancia esa petición se transformó en una obligación conjunta, sin permitirse -en el seno de la acción popular- un debate para que se resolviera entre las partes obligadas las proporciones en que debían asumir las consecuencias o, incluso, cuál de las dos debería responder por la totalidad de la obligación.*

A su vez, en los alegatos de conclusión ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. concretó el marco jurídico de su pretensión, señalando que en este caso se está ejerciendo una pretensión revérsica o la proposición anticipada de la pretensión de regreso a la que tendría derecho la convocante por los perjuicios causados y que eventualmente se causen, como consecuencia de la acción popular. Se indicó, además, que en el proceso se busca materializar la indemnidad de la convocante para que le sean restituidas las consecuencias económicas perjudiciales de la acción popular, teniendo en cuenta que VÉRTICE INGENIERIA S.A.S era el guardián de una actividad peligrosa según el artículo 2356 del Código Civil. Señaló adicionalmente que dicha pretensión no necesariamente se debió ejercer en el proceso de acción popular en razón a la existencia del pacto arbitral y además por cuanto, según ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A., dentro de una acción popular no es posible la realización de un llamamiento en garantía. Así mismo, se indicó que atendiendo a la calidad de guardián de la actividad peligrosa (la construcción) cualquier condena solidaria o no, en contra de ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. lo faculta para repetir contra el responsable según los artículos 15799 y 166710 del Código Civil. También se indicó que "...es necesario clarificar que lo que se pretende no es la declaratoria de la clásica responsabilidad del constructor en donde se le imputa un daño por un error en la elaboración de un proyecto, y es que en esta ocasión el daño tiene origen en las acciones y omisiones."

El Tribunal coincide con los planteamientos de ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. en el sentido de que en este caso no se está persiguiendo una declaratoria clásica de responsabilidad civil contractual bajo los elementos que de ordinario se requieren para la aplicación de una consecuencia indemnizatoria. Dichos elementos se contraen a la demostración de la existencia del contrato, el incumplimiento obligacional, el daño y el correspondiente vínculo de causalidad.

Ahora bien, aducir la existencia de una responsabilidad civil entre partes contractuales a partir de la calidad de guardián de una actividad peligrosa de una de éstas para obtener el resarcimiento de perjuicios -supuestamente ocasionados con la sentencia de acción popular- supone análisis adicionales. Como figura propia de la responsabilidad civil extracontractual, la responsabilidad por actividades peligrosas permite la valoración de conductas generadoras de daños a terceros y no el incumplimiento de obligaciones entre partes contractuales. La hipótesis plausible para que, mediante el ejercicio de una pretensión revérsica, se reclamen perjuicios como los planteados en la demanda al guardián de una actividad peligrosa implicaría el ejercicio de la acción subrogatoria. Esta conclusión resulta coincidente con los fundamentos jurídicos planteados por ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. cuando citó en sus alegatos finales los artículos 1579 y 1667 del Código Civil."

**Más adelante señaló el tribunal de Arbitramento:**

"Así mismo, como lo indica el numeral 3 del artículo 1668 del Código Civil, la subrogación legal opera a favor del que paga una deuda a la que se halla obligado solidariamente, y ello, aún en contra de la voluntad del acreedor. Sobre este particular la jurisprudencia ha señalado lo siguiente:

"En este orden, la aludida extinción de la deuda desde el punto de vista del acreedor, resultado del pago realizado por quien hasta entonces era uno de los deudores solidarios, apareja otras consecuencias, esta vez únicamente entre quienes integraron el extremo pasivo de la obligación, como es la subrogación legal.

De allí que, en concordancia con el numeral 3° del artículo 1668 mencionado, el inciso inicial de la regla 1579 de la compilación legal en cita prevé que «[e]l deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.»”

En el caso particular, tal como se ha indicado, no hubo condena solidaria, no hubo pago de la misma por ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A., por ello no encuentra el Tribunal que se den los supuestos para ejercer una pretensión revérsica en el presente proceso arbitral. Los reclamos que de cara a posibles afectaciones a derechos colectivos y de terceros se hubiesen presentado entre ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. y VÉRTICE INGENIERIA S.A.S. podrían haberse ventilado en la acción popular, sin embargo, no se intentaron. ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. no formuló llamamiento en garantía a VÉRTICE INGENIERIA S.A.S. en el marco de la acción popular. En los alegatos de conclusión ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. indicó que ello no era posible por cuanto la jurisprudencia y la ley excluyen el llamamiento en garantía de las acciones populares, así como por la existencia del pacto arbitral. Sobre la procedibilidad del llamamiento en garantía en este tipo de acciones la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido ambivalente y no hay un criterio unificado entre las secciones primera y tercera. En ocasiones se ha admitido esta posibilidad y en otras se ha negado sin que haya una posición consolidada a la fecha<sup>15</sup>. En todo caso, la Ley 1472 de 1994 no excluye esta figura del régimen de las acciones populares. Sin embargo, el llamamiento en garantía no es obligatorio.

Con independencia de las particularidades del trámite de la acción popular lo cierto es que en la sentencia definitiva de ese proceso no se estableció una condena solidaria en el caso de ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. y VÉRTICE INGENIERIA S.A.S. En el presente proceso tampoco se acreditó la realización del pago de esa condena al Municipio de Envigado por parte de ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. En ese orden de ideas no se dan los presupuestos para el ejercicio de la denominada pretensión revérsica, cuyo único fundamento en un caso como el particular estaría dado por la subrogación legal dispuesta en el numeral 3 del artículo 1668 del Código Civil.

El conflicto contractual que se presentó en la demanda no se origina directamente en el cumplimiento o no de las obligaciones contractuales. Éste, según la concepción de la propia convocante, pasa por la existencia de un supuesto perjuicio originado en la sentencia de acción popular y este Tribunal no encuentra que exista un mecanismo que legitime a ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. para efectuar dicho reclamo -en ejercicio de una pretensión revérsica- diferente al de la subrogación legal. La inexistencia de una condena solidaria anterior y de su pago imposibilitan esta figura y, por los efectos propios del principio de cosa juzgada, es imposible para este Tribunal volver sobre lo ya decidido en la sentencia de acción popular. La imposición de una obligación conjunta en sede judicial mediante sentencia definitiva no supone un perjuicio que pueda ser reconocido en el presente arbitraje.

Por todo lo anterior, deberán negarse las pretensiones primera, segunda y tercera de la demanda en todos los aspectos que tengan que ver con las posibles consecuencias para las partes de la sentencia de acción popular proferida en el proceso con radicado 05001-23-31-000-2005-07260-03.”

Como puede verse, de lo previamente descrito, el Tribunal de Arbitraje sí analizó los hechos y las pretensiones al trasluz de la responsabilidad contractual y los consecuentes perjuicios que de allí se podían derivar, sin que sea cierto

que haya dejado sin resolver ninguna de las pretensiones de la demanda, pues de las citas in extenso que de la sentencia se ha hecho, es posible concluir que nada se dejó al azar o al garete, porque todo fue resuelto, razón por la cual concluye ahora la Sala que las afirmaciones que hizo el recurrente -en torno a la ausencia de pronunciamiento de fondo para desatar la Litis- devienen ajenas a los supuestos fácticos previamente descritos; además, porque justamente sobre el tema, es importante tener presente que el principio de congruencia del laudo se verifica con la debida correspondencia entre lo pedido y lo decidido por el tribunal de arbitramento, en forma tal que la decisión proferida se ajuste a la materia enunciada por las partes, de allí que el análisis del vicio de construcción formal de la providencia debe realizarse de manera objetiva, es decir, verificar que formal y objetivamente el fallo se ajuste a las peticiones de las partes, pero no resulta dable, por la naturaleza de la causal, examinar las consideraciones y los motivos determinantes que ha tenido el juzgador en su decisión, como que la incongruencia recae sobre un error de procedimiento y que nunca sobre un error sustancial, pues, valga repetirlo, que la verificación de la causal es meramente formal y no supone un examen de las consideraciones de fondo que llevaron a los árbitros a fallar en determinado sentido, sino que, se concreta en la comparación de las pretensiones, excepciones y hechos en los que se fundan con lo decidido en el laudo arbitral<sup>1</sup>, por lo que si aquí el Tribunal de arbitramento interpretó la demanda en forma adecuada y negó las pretensiones bajo las consideraciones ya conocidas, por mucho que esta Sala del Tribunal de Medellín pudiera compartir o no la esencia de lo resuelto por el tribunal de arbitramento, no sería competente para acompañar o separarse de esa decisión, por cuanto la competencia respecto del recurso de anulación del laudo arbitral –se repite-, solamente va hasta la verificación o el control formal de dicha sentencia y nada más.

En ese orden de ideas y atendiendo al carácter excepcional del recurso de anulación de laudos arbitrales, en el que la divergencia interpretativa, de apreciación probatoria o de aplicación de normas jurídicas no son razones suficientes para anular el laudo del Tribunal de Arbitramento, porque no

---

<sup>1</sup> El recurso de Anulación contra laudos nacionales en el ordenamiento jurídico colombiano. Daniela Corchuelo Uribe, Bogotá. Universidad Externado de Colombia, 2013.pag 45.

constituyen circunstancias que impliquen un vicio de incongruencia<sup>2</sup>, es por lo que en el caso sub examine, como se acotó previamente, se advierte que el contenido en el laudo objeto de anulación, no obedece a caprichos o arbitrariedades del Tribunal, por el contrario, al hacer un estudio de la parte resolutive, así como de las pretensiones y hechos de la demanda, se evidencia total congruencia de lo decidido con lo petitionado y alegado en el proceso, por lo que dicha causal carece de fundamentos y argumentos suficientes, razón por la cual la petición de anulación del laudo no tiene cabida.

Y es que, a riesgo de ser repetitivos, en la demanda se afirmó que había existido una responsabilidad contractual cuya génesis estuvo en una condena en su contra emitida dentro de una acción popular, con ocasión de un talud que se hizo para la construcción de las casas Canto de Luna en cumplimiento del contrato de administración de obra por delegación, al tiempo que se pidió por adelantado una condena que supuestamente puede surgir del proceso de acción de grupo que viene cursando contra la demandante, a lo que el Tribunal respondió contundentemente que: *“El conflicto contractual que se presentó en la demanda no se origina directamente en el cumplimiento o no de las obligaciones contractuales. Éste, según la concepción de la propia convocante, pasa por la existencia de un supuesto perjuicio originado en la sentencia de acción popular y este Tribunal no encuentra que exista un mecanismo que legitime a ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS S.A. para efectuar dicho reclamo - en ejercicio de una pretensión revérsica- diferente al de la subrogación legal. La inexistencia de una condena solidaria anterior y de su pago imposibilitan esta figura y, por los efectos propios del principio de cosa juzgada, es imposible para este Tribunal volver sobre lo ya decidido en la sentencia de acción popular. La imposición de una obligación conjunta en sede judicial mediante sentencia definitiva no supone un perjuicio que pueda ser reconocido en el presente arbitraje.”*. En conclusión, no es cierto que el Tribunal de arbitramento haya dejado por fuera de su análisis ninguna de las pretensiones, sin que dicho laudo pueda ser

---

<sup>2</sup> “la jurisprudencia ha evidenciado que los recurrentes incurren en el inadecuado manejo de este vicio de incongruencia cuando proponen esta causal con sustento en que el tribunal no valoró una prueba, o no incluyó determinado concepto al liquidar el contrato, o no se pronunció sobre las pretensiones sustentadas en el incumplimiento de un contrato a consecuencia de la declaratoria de nulidad de este, o no se tasó el valor correspondiente a los intereses de mora mediante la aplicación de una fecha inicial. Eventos todos que cuestionan la forma como los árbitros valoraron los hechos, las pruebas y el derecho objeto del litigio, en abierta contradicción con la naturaleza excepcional de este recurso”. Recurso de anulación de laudos arbitrales/ editores Ramiro Bejarano Guzmán, Aida Patricia Hernández Silva y Pablo Moreno Cruz; Daniela Corchuelo Uribe. Bogotá: Universidad Externado de Colombia. 2016. pág. 369.



calificado de incongruente, razón suficiente para que el recurso de anulación resulte frustráneo.

3. Colofón de lo expuesto, la decisión que habrá de tomarse en este recurso extraordinario, será la de declarar infundado el recurso de anulación formulado, ante la improcedencia de configuración de las causales invocadas. Así las cosas, acorde con lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P, numerales 1 y 2 se condenará en costas a la parte recurrente a favor del convocado. En concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo No PSAA16-10544, se fija como agencias en derecho cinco (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes

Por lo que se acaba de argumentar, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, EN SALA CUARTA DE DECISIÓN CIVIL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

#### **V. FALLA**

**PRIMERO:** DECLARAR INFUNDADO el recurso de anulación interpuesto por la parte convocada sociedad Arquitectos e Ingenieros Asociados S.A., contra el laudo arbitral proferido el día catorce (14) de junio de los dos mil veintidós (2022) por el Tribunal de Arbitramento -Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Medellín- en el proceso arbitral convocado por aquella, por las razones expuestas en la parte motiva.

**SEGUNDO: CONDENAR** a la parte convocante al pago de las costas de la actuación en favor de la convocada “Sociedad VÉRTICE INGENIERÍA S.A.S.”, para lo cual se tendrá en cuenta que como agencias en derecho en esta instancia se fijó la suma (5) salarios mínimos mensuales legales vigentes

**NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE**



**JULIÁN VALENCIA CASTAÑO**  
Magistrado





**PIEDAD CECILIA VÉLEZ GAVIRIA**  
**Magistrada**



**JUAN CARLOS SOSA L.**  
**Magistrado**

*Hoja de firmas recurso de anulación con radicado*  
*01*

*05001 22 03 000 2022 00514*